



RESOLUCIÓN No. CNSC - 20192020013385 DEL 11-03-2019

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR”

EL DESPACHO DE CONOCIMIENTO

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las consagradas en la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1437 de 2011, el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015 y el Acuerdo No. CNSC 20161000000036 de 2016, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca esa ley y el reglamento.

En observancia de la citada norma, la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000000036 de 2016, convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR hoy ARN¹.

En virtud de lo anterior, y en aplicación del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC suscribió con la Universidad de Manuela Beltrán, el Contrato No. 361 de 2016, cuyo objeto consiste en *“Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la conformación de lista de elegibles”*.

Así las cosas, en desarrollo del proceso de selección realizado para la convocatoria referida, se ejecutaron las etapas de inscripción, verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, aplicación de las pruebas escritas y valoración de antecedentes, con sus respectivas etapas de reclamaciones, siendo pertinente señalar que el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.637.399, fue admitido a este proceso.

Publicados los resultados definitivos de cada una de las pruebas, la CNSC, conforme a lo dispuesto en el artículo 51² del precitado Acuerdo de la convocatoria, en concordancia con lo previsto en el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, procedió a conformar la lista de elegibles mediante la Resolución 20182220077035 del 27 de julio de 2018, en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar la lista de elegibles para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Código OPEC No. 379, denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17, ofertado en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR hoy ARN, reglamentada por el Acuerdo No. 20161000000036 del 11 de Abril de 2016, así:

Posición	Tipo Documento	Documento	Nombre	Puntaje
1	CC	80247939	JHON ALEJANDRO GARCÍA PEDRAZA	89,62

¹ Mediante el Decreto 897 de 2017 se modificó la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas – ACR, cambiándole también su denominación a Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.

² "ARTÍCULO 51°. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad o institución de Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del Concurso Abierto de Méritos y la CNSC conformará, la lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos objeto de la presente Convocatoria, con base en la información que la ha sido suministrada, y en estricto orden de méritos".

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

2	CC	1121839952	OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO	81,82
3	CC	40438400	MARIA LILY BUITRAGO HEREDIA	80,84
4	CC	1013637399	DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA	80,82
5	CC	30081270	MONICA JULIANA MELO BARACALDO	79,42
6	CC	86084359	OSCAR IVAN PLAZAS RODRIGUEZ	72,98
7	CC	40443755	SONIA ALEXANDRA FLOREZ ENCISO	72,32
8	CC	86074843	DIEGO MAURICIO NOVOA TORRES	71,82
9	CC	40333496	NIDIA JHINETH JIMENEZ TELLEZ	69,85
10	CC	1121861641	CARLOS ALBERTO RIVERA BARRERA	69,18
11	CC	1121846506	LEANDRO LLULIAN CARREÑO CASTELLANOS	67,66
12	CC	40343059	CARMEN ELISA DIAZ SUAREZ	66,67
13	CC	1122125636	YENNY VIVIANA RODRIGUEZ GARCIA	66,02
14	CC	1121845086	JONATHAN ALEXANDER AGUDELO	63,73
15	CC	40412266	ADRIANA MARCELA RINCÓN HERNÁNDEZ	63,30
16	CC	40217461	DAMARIS ANDREA FERRER RONCANCIO	63,22
17	CC	40412299	CARMEN CECILIA PARRADO RIOS	62,90
18	CC	1121888979	OSCAR IVÁN GARZÓN AMAYA	62,58
19	CC	40404993	MAYERLINE NAVARRO MURCIA	60,98
19	CC	1121884801	JESSICA ALEXANDRA PERDOMO VANEGAS	60,98
20	CC	1085283162	CLAUDIA ANDREA MONTERO BOLAÑOS	58,89
21	CC	1094938311	SILVIA ESTEFANIA VELEZ MONTENEGRO	58,62
22	CC	1006700018	TANIA JULIETH ALMARIO ZANABRIA	58,08
23	CC	1121894623	DAYHANA BOLENA DIAZ SANTIAGO	58,05
24	CC	1121882753	ANA ANDREA MORA NIETO	57,80
25	CC	1121882376	MARIEL ALEJANDRA MORENO CUESTA	57,64
26	CC	37949418	LUZ ANDREA DURAN URIBE	57,38
27	CC	1120572166	NORIDA MORALES GALEANO	56,95
28	CC	1121921149	NESTOR CAMILO VARGAS BAQUERO	56,61
29	CC	1075218240	YULI ANDREA GONZALEZ MANA	55,07
30	CC	1110519972	ALEXANDER LOZADA GUTIERREZ	54,95

2. Competencia y oportunidad para solicitar la exclusión de la lista de elegibles

Publicada la referida lista de elegibles el 31 de julio de 2018, la Comisión de Personal de la ARN, por intermedio de su Presidente, la señora MARÍA DEL PILAR AQUITE ACEVEDO, presentó mediante oficio con radicado interno 20186000627112 del 8 de agosto de 2018, solicitud de exclusión de dicha lista al aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, cumpliéndose los requisitos de competencia y oportunidad establecidos en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, por el que se reglamentan los procedimientos a surtir ante y por la CNSC, para realizar esta solicitud:

ARTÍCULO 14. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

- 14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
- 14.2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
- 14.3. No superó las pruebas del concurso.
- 14.4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
- 14.5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
- 14.6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

Los argumentos expuestos por la Comisión de Personal de la ARN en su solicitud de exclusión son los siguientes:

El señor DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, identificado con C.C 1.013.637.399, no cuenta con la experiencia relacionada para el ejercicio de las funciones del cargo ofertado, de acuerdo con lo siguiente:

- El soporte de experiencia expedido por la empresa COMPARTA, SEI CONSULTORES, el cual señala que laboró, del 02 de marzo de 2014 al 19 de enero de 2016, y desde el 01 de febrero de 2013 al 31 de mayo de 2013, respectivamente, no puede ser tenido en cuenta para el cumplimiento de Requisitos Mínimos, por cuanto el mismo no indica las funciones, de manera que resulta imposible determinar si las actividades desempeñadas se encuentran relacionadas con el propósito principal y las funciones esenciales del empleo objeto de concurso, en contravía de lo

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

solicitado por el artículo 19 del Acuerdo reglamentario de la Convocatoria 338 de 2018 (Sic).

- El soporte de experiencia expedido por la empresa CAFÉ INTERNET SARA, el cual señala que laboró brindando atención y servicio al público, no puede ser tenido en cuenta para el cumplimiento de Requisitos Mínimos, por cuanto al revisar las funciones, las mismas son de índole comercial y no relacionadas con aspectos administrativos propios de las entidades públicas, como en el caso del empleo a proveer.

- El soporte de experiencia expedido por la empresa CONALTED SAS, la cual señala que laboró desde 02 de julio de 2013 hasta el 31 de enero de 2014, no puede ser tenido en cuenta para el cumplimiento de Requisitos Mínimos, por cuanto el mismo no indica las funciones, de manera que resulta imposible determinar si las actividades desempeñadas se encuentran relacionadas con el propósito principal y las funciones esenciales del empleo objeto de concurso, en contravía de lo solicitado por el artículo 19 del Acuerdo reglamentario de la Convocatoria 338 de 2018 (Sic).

Con base en las anteriores consideraciones, se advierte que el aspirante no acredita la experiencia solicitada con el lleno de las exigencias establecidas en el Acuerdo de Convocatoria, por lo tanto, no cumple con los Requisitos Mínimos solicitados por el empleo.

3. Competencia de la CNSC para resolver la solicitud de exclusión de la lista de elegibles

La Ley 909 de 2004, dispuso que la naturaleza de la CNSC, como responsable de la administración y vigilancia del sistema de carrera administrativa, excepto de los regímenes especiales de origen constitucional, se encamina a la garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público.

Con este fin, en su artículo 12, literales a) y h), se asignaron a esta Comisión Nacional las siguientes funciones de vigilancia de la correcta aplicación de las normas de Carrera Administrativa:

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

(...)

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, en relación con la exclusión de elegibles de las listas conformadas en los procesos de selección, dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 16. La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este decreto, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.

Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir o no de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará por escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos del Código Contencioso Administrativo.

De las anteriores normas, se deduce la facultad legal de la CNSC para adelantar la actuación administrativa tendiente a decidir si procede o no la exclusión de la lista de elegibles solicitada por la Comisión de Personal.

En consecuencia, en cumplimiento del precitado artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto No. 20182220011654 del 5 de septiembre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación Administrativa de Exclusión en relación con el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, dentro del concurso de méritos adelantado a través de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR".

4. Comunicación del Auto de inicio de la actuación administrativa de exclusión de la lista de elegibles

Conforme al artículo 2 del referido Auto, el mismo fue comunicado el 13 de septiembre de 2018³, por conducto de la Secretaría General de la CNSC, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, al correo electrónico del señor DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA concediéndole al aspirante el término de diez (10) días hábiles que trascurrieron entre el 14 y el 27 de septiembre del mismo año, para que en ejercicio de su derecho de contradicción, interviniera en la presente actuación administrativa.

³ Conforme se evidencia en la Constancia de envío que reposa en el expediente.

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

5. Intervención del aspirante en la actuación administrativa de exclusión de la lista de elegibles

El aspirante no allegó escrito de intervención ante la CNSC dentro del término establecido para ello.

6. Fundamentos jurídicos para la decisión

En primer lugar, se debe resaltar que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que la convocatoria, como una etapa del proceso de selección para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, "(...) es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes" (subrayado fuera de texto), precepto sobre el que se ha pronunciado favorablemente la Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre las cuales se pueden destacar las Sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-829 de 2012 y T-180 de 2015. Específicamente, en la Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, dicha corporación manifestó:

(...) En relación con la etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que "Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso (...) incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla" (Subrayado fuera de texto).

En la misma línea jurisprudencial, en la Sentencia SU-446 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresó:

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 (...). La sentencia C-040 de 1995 (...) reiterada en la SU-913 de 2009 (...), explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...).

(...)

Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, "la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes", y como tal impone las reglas de obligatoria observancia para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinear los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes (...).

(...)

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular (Subrayados fuera de texto).

En los mismos términos se pronunció en la Sentencia T-829 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

Es preciso tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...), la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes (Subrayado fuera de texto).

Y más recientemente en la Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio:

La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.

(...)

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (...), haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo (...).

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso (...), lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de (sic) los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de (sic) las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (...) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal (...). Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:

- (i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (...).
- (ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.
- (iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe (...).

(...)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe (...). Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen "ley para las partes" que intervienen en él (...) (Subrayados fuera de texto).

A su vez, el Consejo de Estado Sección Primera en sentencia del 17 de febrero de 2011 M.P. María Elizabeth García González. Ref: 2010-03113-01, se pronunció así:

El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección.

(...) De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como "la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley"⁴. (...)

Sobre la finalidad de los concursos de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-533 de 2010, señaló:

Como lo ha expresado la jurisprudencia, [s]e debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan"⁵ (Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, el artículo 17 del referido Acuerdo de convocatoria, define la experiencia relacionada así:

ARTICULO 17°. DEFINICIONES. Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...) **Experiencia relacionada:** Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

En consecuencia, el artículo 19, señala que la experiencia se debía certificar así:

ARTICULO 19°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación del pensum académico deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional.

⁴ Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-982 de 2004

⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-954/01, M.P. Jaime Araujo Rentería.

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta:

- a) Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide;
- b) cargos desempeñados;
- c) funciones, salvo que la ley las establezca;
- d) fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año);

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral, no es necesario que las certificaciones las especifiquen.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad o empresa, o quien haga sus veces.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de ejecución del contrato (día, mes y año).

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, no serán tenidas como válidas y en consecuencia no serán objeto de evaluación dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución 7144 de 2015 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7. Análisis probatorio

Se procede, entonces, a realizar un estudio de los documentos aportados por el aspirante en el aplicativo Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro del plazo señalado en la convocatoria que nos ocupa, lo cual permitirá establecer si procede o no la causal alegada por la Comisión de Personal para excluir al elegible.

Para tal fin, se tendrán en cuenta los requisitos exigidos para el empleo identificado con el Código OPEC No. 379 al cual se inscribió el aspirante, conforme lo prevé el artículo 10 del Acuerdo de la convocatoria. Al verificar en el SIMO esta información, se encuentra lo siguiente:

Estudio: Título de formación Tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Economía, Administración, Contaduría Pública, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Educación, Sociología, Trabajo Social y afines o Psicología.

Experiencia: Nueve (9) meses de experiencia relacionada en el cargo.

Considerando que el aspirante acreditó Título de Contador Público, siendo éste de un nivel de formación superior al exigido por la OPEC 379, se entiende cumplido el requisito de estudio de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1083 de 2015⁶, por lo que debe acreditar nueve (9) meses de experiencia relacionada. Ahora bien, al verificar los documentos aportados por el aspirante en SIMO para acreditar este requisito de experiencia, se analizará la certificación validada por la Universidad Manuela Beltrán en la etapa de verificación de requisitos mínimos:

⁶ ARTÍCULO 2.2.2.5.3 Acreditación de formación de nivel superior. Cuando para el desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación superior en pregrado o de formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de formación superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias laborales.

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

- Certificación expedida por la propietaria del establecimiento de comercio CAFÉ INTERNET SARA, con NIT 40.391.315-1, en la que consta que el aspirante laboró desde el día 15 de julio de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012, brindando atención y servicio al público. Con esta certificación acredita dieciséis (16) meses y quince (15) días de experiencia.

Se advierte que la certificación cumple con los requisitos del artículo 19 del Acuerdo de convocatoria por cuanto en ella se señala las actividades realizada por el aspirante en el desarrollo del contrato certificado. Ahora bien, con el fin de zanjar toda duda que exista frente a la relación de la experiencia certificada con las funciones establecidas en la OPEC 379 para la cual concursó el aspirante, se procederá a realizar el siguiente análisis comparativo:

Analizadas las actividades ejecutadas por el aspirante en cumplimiento del contrato certificado, este Despacho considera que no se encuentran relacionadas con las funciones del empleo a proveer, toda vez que las actividades de brindar atención y servicio al público están descritas de manera indeterminada, lo cual impide determinar de manera certera, la forma en que se ejecutaban dichas labores. La descripción que se echa de menos, es necesaria para verificar si la experiencia adquirida en dicho empleo está relacionada con la función atención al ciudadano que se predica del empleo a proveer, la cual exige conocimientos mínimos de recepción y seguimiento de solicitudes de información, quejas y reclamos, considerados de vital importancia para una entidad pública por cuanto está ligado a trámites en los que se debe garantizar el Derecho Constitucional de Petición.

Consecuente con lo anterior, se procederá a analizar las otras certificaciones laborales aportadas por el aspirante dentro del plazo establecido por la Convocatoria, para lo que realizaremos el siguiente cuadro comparativo:

EMPLEO A PROVEER OPEC 402

PROPOSITO PRINCIPAL: Brindar atención al ciudadano frente a las diferentes solicitudes de información, quejas y reclamos de conformidad con la normatividad vigente, contribuyendo con la calidad y la eficiencia de los servicios y fortaleciendo los niveles de satisfacción y confianza institucional.

FUNCIONES

- Recibir, apoyar y hacer el seguimiento al trámite de las solicitudes, quejas y reclamos que presenten las personas en proceso de reintegración, culminados, sus familias y/o la comunidad, de acuerdo a los tiempos establecidos y los lineamientos de la Entidad.
- Relacionar en el Sistema de Información para la Reintegración -SIR-, las aperturas, seguimientos, cierres de los casos, novedades y documentos de las personas en proceso de reintegración, de conformidad con los procedimientos establecidos y cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.
- Mantener actualizado en el Sistema de Información para la Reintegración -SIR, los datos de ubicación y demás datos de contacto de las personas en proceso de reintegración, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos y aplicando metodologías reconocidas.
- Aplicar los diferentes instrumentos de medición de satisfacción de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad, observando criterios de veracidad y confiabilidad de la información.
- Presentar al Coordinador del Grupo Territorial y/o Puntos de Atención periódicamente reportes e informes sobre los casos de atención abiertos, cerrados, pendientes de solución y traslados, de conformidad con los procedimientos establecidos y cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.
- Apoyar las labores del Grupo Territorial y/o Puntos de Atención en lo referente a convocatorias de personas en proceso de reintegración y/o actores externos, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la programación establecida.
- Mantener actualizada la información de las carteleras internas y externas del Grupo Territorial y/o Puntos de Atención, observando criterios de veracidad y confiabilidad de la información.
- Realizar el soporte técnico a la atención y apertura del caso de riesgo por seguridad de las personas en proceso de reintegración, e instalaciones del Grupo Territorial y/o Puntos de Atención, de acuerdo a los instructivos o protocolos que establezca la Entidad.
- Administrar, alimentar y garantizar la seguridad de los sistemas de información, gestión y/o bases de datos a su cargo, presentando los informes que sean requeridos interna o externamente, observando criterios de veracidad y confiabilidad de la información.

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

- Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.

CERTIFICACIONES Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES	APRECIACIONES SOBRE LA RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA Y LAS FUNCIONES DEL EMPLEO
<p>Certificación suscrita por la Coordinadora Administrativa Regional Centro de la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada –COMPARTA EPS-S, en la que consta que el aspirante labora en el cargo de Ejecutivo Junior para el Departamento del Meta desde el día 1 de marzo de 2014 hasta el 19 de enero de 2016 (esta última fecha corresponde a la de expedición de la certificación, con la cual se prueba con certeza la última vinculación del aspirante). Con esta se contabiliza un tiempo de experiencia de veintidós (22) meses y dieciocho (18) días. Se adjuntan con la certificación, las minutas de los contratos laborales ejecutados, todos con igual denominación de cargo, objeto y obligaciones contractuales e identificados con los números 23-2014-08, 23-2014-10 y 23-2015-05. El período total de ejecución que abarca a dichos contratos inicia desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, atendiendo a que la certificación acredita la vinculación hasta el 19 de enero de 2016, en el mismo cargo de que tratan dichas minutas, se entenderá que hasta dicha fecha asumió el mismo objeto y responsabilidades definidas en las mismas. El objeto y las obligaciones son las siguientes:</p> <p><i>"COMPARTA EPS contrata los servicios personales del trabajador para desempeñar el cargo de Ejecutivo Junior Departamental quien tendrá a su cargo <u>soportar los procesos de las diversas dependencias en razón a su oportunidad y volumen operativo que correspondan a procedimientos que generen datos e información sistémica en todos los procesos necesarios que pertenezcan a las oficinas asignadas y que no correspondan a decisiones empresariales, en un horario de 7:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 6:00 pm de lunes a viernes(...)"</u></i>. Las responsabilidades establecidas en la cláusula cuarta de dicho contrato fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Recepción y revisión de facturas para realizar pago.</u> 2. Contabilización de egresos y elaboración de planillas para pagos a proveedores. 3. <u>Recepción, revisión y cruce de cartera con la red prestadora de servicios.</u> 4. Liquidación de contratos con sus respectivas hojas de trabajo con la Red prestadora de servicios. 5. <u>Reporte de pago a la red.</u> 6. Legalización de anticipos. 7. Toda otra actividad requerida por cada uno de las áreas del Nivel Departamental. 	<p>La experiencia acreditada en la certificación de la columna anterior, adquirida por el aspirante al ejecutar las actividades allí subrayadas, se relacionan con la función del empleo de <i>"Recibir, apoyar y hacer el seguimiento al trámite (...)"</i> toda vez que tratan de manera generalizada sobre el cumplimiento de las etapas necesarias de un procedimiento específico para garantizar su culminación efectiva, lugar común compartido entre las funciones relacionadas.</p>
<p>Certificación expedida por el Gerente Administrativo y Comercial de CONALTED SAS, con NIT 900.488.251-1 en la que consta que el aspirante labora desde el 2 de julio de 2013 hasta el 31 de enero de 2014 en el cargo de Jefe de Inventario y Asistente Comercial.</p>	<p>La Certificación no establece las funciones desempeñadas por el aspirante y de la denominación del cargo no se pueden inferir las mismas dada la indeterminación que se percibe de la denominación del cargo en lo referente a la identificación de al menos una actividad concreta realizada por el aspirante en el desempeño del mismo. En ese sentido, la certificación estudiada no cumple con los requisitos del artículo 19 del Acuerdo de convocatoria.</p>

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

Certificación expedida por el Representante Legal de la empresa Servicios Empresariales Integrales Consultores SEI CONSULTORES S.A.S, con NIT 900.439.433-6, en donde consta que el aspirante laboró desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2013, como Consultor de costos en el proyecto "Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Costos para el Hospital Departamental de Villavicencio, en jornada laboral de tiempo completo, contabilizándose un tiempo total de experiencia de cuatro (4) meses, desarrollando las siguientes funciones:

- Distribución de activos.
- Distribución de mano de obra directa e indirecta por actividad de cada unidad funcional.
- Asignación de costos indirectos utilizados en los diversos procesos de cada actividad.
- Homologación de cuentas contables de nómina para mano de obra directa e indirecta.
- Reporte de información de costos estándar a los jefes de las diversas unidades funcionales.
- Digitación de datos y valores dentro del sistema integrado de información asignados por el jefe inmediato.

Se advierte que las actividades desarrolladas por el aspirante, subrayadas en la columna anterior están relacionadas con la función del empleo de "(...) *alimentar (...) los sistemas de información, gestión y/o bases de datos a su cargo, presentando los informes que sean requeridos (...)*" por corresponder a actividades de ingreso de información y su reporte, las mismas que constituyen un lugar común con el empleo a proveer.

Atendiendo al cuadro anterior, se advierte que la experiencia acreditada en las certificaciones expedidas por las empresas Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada –COMPARTA EPS-S y Servicios Empresariales Integrales Consultores SEI CONSULTORES S.A.S, están relacionadas con algunas de las funciones del empleo a proveer, de acuerdo al análisis anterior. Por lo anterior, contabilizado el tiempo de experiencia acreditado se obtiene un resultado de veintiséis (26) meses y dieciocho (18) días de experiencia relacionada, el cual es superior a los nueve (9) meses de experiencia relacionada exigida en la OPEC 379.

Considera este Despacho que en la presente actuación administrativa, no se deben sobreponer las formas rituales para sacrificar un derecho sustantivo, cual es el del acceso a cargos públicos, pues ello conllevaría a que, al aplicar de manera literal los preceptos señalados en el artículo 19 del Acuerdo al momento de validar las certificaciones de experiencia, desconoceríamos una verdad objetiva que, para el caso que nos ocupa, se extrae de las minutas de los contratos anexas a la certificación actividad ejecutada y señalada en la certificación expedida por COMPARTA EPS-S, objeto de estudio, que como ya lo advertimos, está relacionada con algunas de las funciones del empleo a proveer, situación que obliga a dar aplicación a lo previsto en el artículo 228⁷ de la Constitución Política y al artículo 3⁸ del CPACA. Este Despacho encuentra que el hecho de que en la certificación en mención no se establezcan las funciones ello no implica *per se* que se incumpla con lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo de convocatoria, pues, las funciones vienen detalladas en las minutas contractuales anexas a la misma, con lo que se cumple con la finalidad de la norma que es la de determinar si con los documentos aportados en los plazos establecidos en la Convocatoria, la experiencia está relacionada con las funciones del empleo a proveer, asunto que puede ser perfectamente determinable en este caso particular.

Así las cosas, el análisis de la certificación debe obedecer al principio constitucional de la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal en los concursos de méritos, respecto del cual, el Consejo de Estado mediante Sentencia del 16 de febrero de 2012, radicado 25000-23-15-000-2011-02706-01, se pronunció en el siguiente sentido:

CONCURSO DE MERITOS - Violación del debido proceso y la igualdad / CONCURSO DE MERITOS - Certificaciones que acreditan experiencia relacionada aunque no contengan una descripción de las funciones desempeñadas.

Es evidente que en principio, el hecho que el peticionario haya aportado las mencionadas certificaciones sin especificar las funciones del cargo constituye un incumplimiento a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo 077 de 2009 (que reglamenta la fase II de la mencionada convocatoria), que como acertadamente lo indicó la Comisión, tiene como finalidad verificar que el concursante reúne la experiencia laboral relacionada con el cargo al que aspira y que por lo

⁷ Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustantivo. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

⁸ Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

tanto, reúne los requisitos mínimos para ocuparlo. No obstante lo anterior, se advierte que las certificaciones que fueron aportadas por el accionante sin la descripción de las funciones desempeñadas, hacen referencia a cargos de auxiliar de servicios generales que ha ocupado con anterioridad en instituciones educativas del Municipio de Baranoa (Atlántico), que a juicio de la Sala son empleos cuyas funciones se corresponden con el que fue ofertado en la Convocatoria 001 de 2005. En virtud de lo anterior, la Sala estima que para el caso en particular la descripción de las funciones en las mencionadas certificaciones se torna innecesaria, pues el hecho que el actor haya desempeñado empleos cuyas funciones resultan a todas luces idénticas con las de aquel al que aspira, acredita plenamente que tiene la experiencia laboral requerida para ejercer las funciones del mismo en propiedad... Por las anteriores razones, en criterio de la Sala la decisión de la CNSC de excluir al accionante del concurso público por un aspecto meramente formal que desconoce la situación particular del demandante, amenaza los derechos al debido proceso e igualdad de éste, toda vez que le impide seguir el trámite establecido por la convocatoria a fin de aspirar al cargo por el cual concursó, en las mismas condiciones de los concursantes que también acreditaron tener la experiencia laboral requerida para dicho empleo y que paulatinamente han superado las etapas previstas (Subrayado fuera de texto).

A su vez, conviene recordar que ya la Corte Constitucional se había pronunciado mediante Sentencia T-052 de 2009, en relación con las formalidades dirigidas a acreditar requisitos dentro de los concursos de mérito, así:

Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Artículo 228 de la Constitución Nacional. Exceso ritual manifiesto. Reiteración de jurisprudencia.

La Constitución Nacional en su artículo 228, dentro de los principios de la administración de justicia, consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho sustancial.

Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, dichas formas han sido establecidas para garantizar a las partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que respete sus derechos. No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un exceso ritual manifiesto.

Frente al alcance del artículo 228 superior, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

"Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia "prevalecerá el derecho sustancial".

Esta corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha dicho:

"Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio."

(...) "2.1. La interpretación adecuada de la primacía anotada significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebido y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado.

(...) Establecida como está, prima facie, la condición de programa de especialización al curso realizado por el actor, el hecho de haberse expedido un certificado y no un diploma o acta por parte de la institución universitaria, para dar fe de la aprobación del curso, no deviene en un argumento suficiente para menoscabar la condición o característica esencial del curso de especialización y por consiguiente para rechazar el único medio probatorio existente.

En este caso, si el actor adquirió un conocimiento especializado en el respectivo curso de especialización de la Universidad Santo Tomás, y éste se encuentra acreditado por la misma institución, se imponía el reconocimiento del certificado anexo. De lo contrario, prevalecería lo formal sobre lo sustancial y se incurre en un exceso de ritualismo, ya que el documento de prueba estaría sujeto a una tarifa probatoria en extremo rigurosa cuando se aplica a momentos académicos sujetos a reglas vigentes hace cerca de treinta años(...)"

En conclusión, el señor DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.637.399, ACREDITÓ veintiséis (26) meses y dieciocho (18) días de experiencia relacionada, tiempo superior al exigido por el empleo identificado en la Código OPEC No. 379 denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17, ofertado en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR, hoy ARN, por lo que se desestiman los argumentos señalados por la Comisión de Personal de la ARN en su solicitud de exclusión.

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015, se dispuso que es función de los Despachos de los Comisionados, adelantar las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusión de los elegibles, en desarrollo de los procesos de selección que tiene a su cargo, y proferir los correspondientes actos administrativos, y en atendiendo a las funciones encargadas al Asesor,

"Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de excluir de la lista de elegibles a el aspirante DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR"

Código 1020, Grado 17, establecidas en el numeral 7 del artículo primero de la Resolución No. 20196000012765 del 5 de marzo de 2019 de la CNSC, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No Excluir a DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.637.399, de la Lista de Elegibles conformada mediante Resolución No. 20182220077035 del 27 de julio de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Código OPEC No. 379, denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17, ofertado en el marco de la Convocatoria No. 338 de 2016 – ACR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en los términos del CPACA al señor DIEGO FERNANDO ACOSTA CASTAÑEDA, el contenido de la presente Resolución, para lo cual se suministra la siguiente dirección de contacto: Calle 23 #34-82, en la ciudad de Villavicencio, Meta y el correo electrónico: diego_acosta_101@hotmail.com. En caso de existir autorización expresa del interesado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 67 del CPACA, se podrá realizar notificación electrónica al correo autorizado.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto ante la CNSC dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal y a la Comisión de Personal de la ARN, en la en la Carrera 9 No. 11 -66 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Dado en Bogotá, D.C,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JOHANNA P. BENÍTEZ PAEZ
Asesora con encargo de algunas funciones

Proyectó: Diana C. Figueroa Meriño – Contratista del Despacho del Comisionado